

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Yopal, veintisiete (27) de julio de dos mil veinte (2020)

Ref.: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Convoca a sesiones extraordinarias del Concejo Municipal de Hato Corozal. Ejercicio de poderes administrativos ordinarios. Hato Corozal. Decreto 100.13.040 del 17/07/2020. Rechazo por improcedencia del CIL.

Origen: MUNICIPIO DE HATO COROZAL.
Acto: DECRETO 100.13.040 del 17 de julio de 2020
Radicación: 850012333000-2020-00373-00

Magistrado ponente: NÉSTOR TRUJILLO GONZÁLEZ

ASUNTO POR RESOLVER

Se trata de proveer acerca del decreto municipal de la referencia para ejercer control inmediato de legalidad de actos administrativos territoriales, presuntamente expedidos en desarrollo de estados de excepción, acorde con las reglas instrumentales del art. 185 de la Ley 1437.

EL ACTO SOMETIDO A CONTROL DE LEGALIDAD

1° Se trata del Decreto 100.13.040 del 17/07/2020 *“Por medio del cual se cita a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal de Hato Corozal”*. Concretamente, se dispuso convocar del 21 al 29 de julio de 2020 y hasta por 6 sesiones extraordinarias, con el fin de estudiar y dar trámite a los siguientes proyectos de acuerdo (art. 1): i) P.A 100.03.04.003 del 17/07/2020 *“Por medio del cual se armoniza el Plan de Desarrollo 2020-2023 con el presupuesto general del municipio para la vigencia fiscal 2020”* y, ii) P.A 100.03.04.04 del 17/07/2020 *“Por medio del cual se fija el salario del alcalde para la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones”*.

2° Se invocaron como fundamentos: numeral 8 del art. 315 de la Constitución Política; arts. 23 y 91 de la Ley 136/1994 y art. 29 de la Ley 1551 de 2012. Tales disposiciones normativas atañen al régimen administrativo ordinario preexistente a los decretos legislativos que han declarado las dos emergencias económicas, sociales y ecológicas por la pandemia de la COVID 19; tampoco se alude a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (R-385 del 12/03/2020).

CONSIDERACIONES

1ª Competencia. Para el trámite de control automático de legalidad, cuando efectivamente se trata de actos administrativos territoriales expedidos con fundamento o para el desarrollo de decretos legislativos adoptados en el marco de estados de excepción, la competencia funcional es privativa del Tribunal, acorde con los arts. 136 y 151-14 CPACA.

2ª El marco normativo de referencia (aspecto procesal)

2.1 El problema conceptual. La serie de casos CIL ha dado lugar en la Corporación a enfoques diferentes; el mayoritario, que se ha centrado en que los actos expedidos a partir del 17/03/2020, fecha de inicio de vigencia del D.L. 417/2020, que guarden relación con la emergencia sanitaria, en el entorno de la pandemia por la COVID 19, deben admitirse para dar curso al mecanismo especial del art. 136 CPACA; otro, que defiende el magistrado que ahora provee, que adicionalmente examina preliminarmente la naturaleza de los decretos nacionales que se invocan y de los demás fundamentos normativos que los motivan, para abrir o cerrar paso al CIL. Se privilegia admisión en los casos dudosos. Para los actos expedidos antes del 17/03/2020, la lectura ha sido unánime: no procede el CIL.

2.2 En esta oportunidad, se advierte que el acto sometido a CIL, se profirió fundamentalmente con base en diversos preceptos ordinarios de carácter permanente, con el fin de convocar a sesiones extraordinarias en el Concejo Municipal de Hato Corozal, para debatir proyectos de acuerdo relacionados con: i) la armonización del Plan de Desarrollo del municipio con el presupuesto, y ii) el salario del alcalde, únicamente.

2.3 Antecedentes. Esta colegiatura transitó inicialmente una solución ecléctica, alejada tanto de los extremos restrictivos como de los excesivamente expansivos en que se han ubicado otros intérpretes; con pragmatismo judicial, se ha tenido presente que el CIL no hace desaparecer los medios ordinarios de control; que frente a la duda debe dársele entrada; que el escrutinio por este medio excepcional pretende ser rápido, puede ser oficioso y contener los desvaríos o excesos de las autoridades, pero que no puede hipertrofiarse, con menoscabo de los loables fines que se buscan, porque es imposible abarcar absolutamente todo el ordenamiento para compararlo con el acto que se estudia y porque el fallo, con mínima apertura a la participación de la ciudadanía y al debate probatorio, se profiere en única instancia en un tribunal, con riesgo adicional de acentuar la federalización de la JCA o de congestionar al Consejo de Estado con múltiples tutelas contralas decisiones de estas corporaciones. Se busca un justo medio prudente.

2.3.1 El funcionario que profiere este auto estima necesario referirse a una notoria lectura reciente en pro de la expansión del CIL; opción singular que se construyó con los siguientes pilares: i) el bloque de constitucionalidad, en cuanto estipula el deber de los Estados de propender por la tutela judicial efectiva de los derechos; ii) la proliferación de medidas restrictivas de derechos, tales como circulación o movilidad, que dificulta arribar al estrado; y iii) la suspensión de términos para actuaciones judiciales ordinarias, que restringe la intervención de los jueces en guarda de tales derechos¹. No existe actualmente unidad de criterio en el Consejo de Estado y estos asuntos se están despachando en salas especiales de decisión, sin intervención del Pleno Contencioso, que había fijado un solo rumbo.

3ª CASO CONCRETO

3.1 El Decreto 100.13.040 del 17/07/2020 convocó a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal de Hato Corozal, con el fin de estudiar y debatir concretos proyectos de acuerdo que no guardan relación con los decretos legislativos que declararon la emergencia económica, social y ecológica por la pandemia de COVID -19. Toda la normativa citada, es previa a los D.L. 417 y 637 emitidos por el Gobierno Nacional.

3.2 En el caso concreto, ninguno de los mandatos del decreto municipal se deriva o apoya en el D.L. 417 de 2020, ni en la segunda emergencia económica, social y ecológica (D.L. 637/2020). El primero de esos decretos declarativos del estado de excepción ya no estaba vigente cuando aquel se produjo; tampoco invoca entre sus fundamentos alguno de los decretos legislativos, todavía vigentes, que se adoptaron hasta el 17/04/2020; ni los que vienen actualmente desarrollando el D.L. 637/2020. Ni siquiera alude a contingencias de la COVID 19, ni establece relación alguna entre la emergencia sanitaria, sus protocolos de bioseguridad y la regulación transitoria que han adoptado autoridades nacionales, de Casanare y del propio municipio de Hato Corozal, para ocuparse de esa situación de coyuntura.

3.3 Significa lo anterior que no es procesalmente viable examinar el Decreto 100.13.040 del 17/07/2020 de Hato Corozal en sede de control inmediato de legalidad, vía por la que podría esta Corporación conocer en única instancia; en su lugar, quedan abiertos los diversos medios ordinarios de control contencioso administrativo, cuyo despliegue tiene que hacerse ante el juez singular de primer grado, acorde con la tabla de competencias que define la Ley 1437.

¹ Consejo de Estado, Sección Segunda-A, auto unitario del 15/04/2020, W. Hernández Gómez, radicación 11001-03-15-000-2020-01006-00. Se advierte que esa posición fue rectificada por su propio autor, ver: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 19, auto de ponente del 20/05/2020, W. Hernández Gómez, radicación 110010315000-2020-01958-00. Similares enfoques restrictivos, por la técnica instrumental propia del CIL, pueden verse en las siguientes providencias recientes (casos CIL emergencia sanitaria 2020): Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 11, auto de ponente del 22/04/2020, S.J. Carvajal Basto, radicación 11001-03-15-000-2020-01163-00(CA)A; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 10, sentencia del 10/05/2020, S.L. Ibarra Vélez, radicación 110010315000-2020-00944-00.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

CIL-850012333000-2020-00373-00 pág. 3

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Casanare, por auto de ponente,

RESUELVE:

1° RECHAZAR por improcedente el estudio del Decreto 100.13.040 del 17/07/2020, remitido por el municipio de Hato Corozal para control inmediato de legalidad; consecuentemente, DECLARAR incompetencia funcional de esta colegiatura para conocer del asunto.

2° En firme, líbrense las pertinentes comunicaciones al alcalde y al personero de Hato Corozal; igualmente, con carácter informativo, al gobernador de Casanare.

3° Incorpórese el auto al expediente digital; prescídase de conformar cuadernos físicos; presérvase el digital en el repositorio institucional.

NOTIFÍQUESE



D.L. 491 a. 11 y 806 a. 2

Firma escaneada controlada; 27/07/2020. Sin asignar firma electrónica. Pág. 4 de 4

NÉSTOR TRUJILLO GONZÁLEZ

Magistrado

Eliana